El Pulso Laboral

Viernes, 23 de Octubre de 2020

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que sí es necesaria una reforma regular la subcontratación y evitar abusos bajo esta figura laboral, por lo que las autoridades siguen trabajando en la elaboración de una iniciativa para enviar al Congreso de la Unión. “Estamos avanzando y por instrucciones del Presidente, de manera coordinada, para tener una legislación que nos ayude realmente a eliminar de tajo la subcontratación abusiva, ponerle límites, establecer las reglas claramente y sobre todo mecanismos más eficaces para que la autoridad pueda sancionar y pueda identificar dónde se esconde”, dijo en conferencia de prensa. De esta manera, Alcalde Luján descartó que el documento ya esté terminado, sino que se sigue trabajando de manera conjunta entre las diferentes autoridades federales para abordar el tema. “Muy pronto esperamos poder tener concluido este proyecto, que se presente esta iniciativa, la presentaremos obviamente de la mano del Presidente en algún momento”, puntualizó. Andrés Manuel López Obrador ha destacado en las últimas semanas que la subcontratación debe regularse y para ello, se requiere una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el gobierno federal impulsará una iniciativa en este sentido. La titular de la STPS, recordó que la subcontratación es una modalidad que comenzó a inspeccionarse en la actual administración, gracias al trabajo coordinado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal. El intercambio de información entre estas instituciones ha permitido identificar a las empresas que simulan la subcontratación. “Esto nos ha ayudado bastante porque cada uno aporta información que nos ayuda a detectar los grupos o este tipo de redes, que no solamente evaden responsabilidades laborales, sino que evaden responsabilidades fiscales de seguridad social, sobre todo hay un subregistro muy importante vinculado con la subcontratación”, resaltó la secretaria del Trabajo. A pesar de estos esfuerzos, con los cuales se ha logrado que grupos empresariales contraten directamente a los trabajadores que tenían subcontratados, por tratarse de una simulación, agregó Luisa María Alcalde, las autoridades necesitan una reforma que les permita tener más herramientas para regular esta modalidad. “Falta mucho más y creemos que con estas modificaciones legales vamos a avanzar más rápido”, subrayó la funcionaria federal. La subcontratación o tercerización es un esquema de trabajo que en México ha tomado relevancia en los últimos años, de 2003 a 2018 el personal en ocupado de esta manera pasó de 2.1 millones a 6.9 millones de trabajadores. Las claves de la regulación A inicios de este mes, Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, expresó que la subcontratación ilegal es un delito a gran escala que afecta a trabajadores, finanzas públicas y a los propios empresarios que sí operan en la legalidad. En ese sentido, Salafranca Vázquez compartió los cinco elementos que, desde la Secretaría del Trabajo consideran importantes para regular el outsourcing: registro nacional de empresas de subcontratación, fortalecimiento de las inspecciones, tercerización acotada, modalidad justificada por la especialización y transparencia en las contrataciones. La reforma de subcontratación es una discusión se frenó en el Congreso de la Unión en el periodo de sesiones pasado, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se elaboraron dictámenes que quedaron congelados por la falta de consenso para su avance. Son diversas las propuestas para regular esta figura de contratación, pero el registro nacional de empresas es un punto en el que coincide la

mayoría. Durante el parlamento abierto que se celebró en el Senado en febrero de este año, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, afirmó que este era un punto en el que había consenso entre autoridades, legisladores, patrones y sindicatos.